



ORAUX DE LANGUES –TEXTES (Echantillon)

LANGUE VIVANTE B

LANGUE : ESPAGNOL

Patxi López pide al PP que se deje de “peros” y muestre su “rechazo” a la violencia en Ferraz ante el silencio de Feijóo

INFOBAE, 2 de enero de 2024

Pablo de Cea

El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha hecho un llamamiento este martes al Partido Popular para que se posicione de manera “firme y decisiva” contra los episodios de violencia que se han manifestado en las protestas de Ferraz, especialmente las que tuvieron lugar en Nochevieja frente a la sede del PSOE. López ha exigido que el principal partido de la oposición se distancie claramente de cualquier actitud que propicie este tipo de comportamientos.

Durante una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, en la Cadena Ser, López ha destacado la gravedad de los acontecimientos registrados durante la protesta de fin de año, donde un grupo de manifestantes atacó una piñata que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para López, se trató de “un acto de violencia repleto de odio” que debe ser abordado con la mayor seriedad para evitar una escalada de acontecimientos similares o incluso peores.

El portavoz socialista ha recalcado que estas acciones deberían ser consideradas como un “delito de odio”, tanto es así que desde el PSOE contemplan la posibilidad de llevar el caso ante la Fiscalía. López ha denunciado que ciertos discursos políticos pueden estar incitando a este tipo de acciones violentas y ha insistido en la necesidad de ponerles fin.

En este punto, ha hecho alusión a los calificativos y acusaciones que algunos sectores de la oposición han dirigido a Sánchez en los últimos meses: “traidor”, “dictador”, o sugerir que está “destruyendo la democracia y el Estado de derecho”. Según López, estas afirmaciones podrían conducir a que personas actúen con la mentalidad de “a por ellos”.

También ha lamentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya condenado aún los actos de Nochevieja, mientras que al ser preguntado sobre si algún miembro de la dirección de los ‘populares’ se ha puesto en contacto con el PSOE tras el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez, López ha indicado que “no le consta”.

Ante esta coyuntura, Patxi López considera que es imprescindible recurrir a la justicia para procesar a los responsables de los sucesos violentos y, al mismo tiempo, hacer un llamamiento a la cordura y a la moderación sobre el tono empleado en los discursos que, de acuerdo a su análisis, están incentivando este tipo de comportamientos en la sociedad.

Respecto a las medidas concretas que el PSOE planea adoptar, López ha revelado que el departamento jurídico del partido está analizando la situación y contemplando la pertinencia de emprender acciones legales. Aunque está convencido de que los hechos delictivos están claramente tipificados como delitos de odio, ha reconocido la existencia de una delgada línea entre lo que se considera libertad de expresión y lo que no.

Según el portavoz socialista, es vital una intervención legal contra los responsables, y paralelamente, es necesario estabilizar el ambiente político para que no se induzca a actos violentos a través de la retórica, con el objetivo de salvaguardar la convivencia pacífica y el respeto mutuo en el ámbito público.

Varios ministros socialistas se han pronunciado para mostrar su profundo rechazo ante lo sucedido. “Ya no solo asedian nuestra sede, ahora también simulan el apaleamiento del presidente del Gobierno de España. Basta de odio. Basta de

energúmenos”, ha expresado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se ha comprometido a trabajar “por una España más justa, libre, diversa, habitable y tolerante”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que acciones como esta ocurren “cuando se da aire a la extrema derecha”. “Un grupo de energúmenos insultando gravemente al Presidente del Gobierno a las puertas de Ferraz y sin que Feijóo haya hecho nada para impedirlo ni lo haya condenado aún”, ha indicado. La ministra de Deporte, Educación y Portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha señalado que “empezaron asediando las sedes del PSOE y ahora simulan el ahorcamiento del presidente del Gobierno. ¡Basta ya!”.

(...)

Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala luego de una extensa jornada de desacuerdos en el Congreso que provocaron el retraso de su investidura

BBC, 14 de enero de 2024

Pasada la medianoche del lunes (hora local), luego de una larga espera y una jornada de caos en el Congreso del país, Bernardo Arévalo recibió la banda presidencial y se juramentó como presidente de Guatemala.

El mandatario asumió el cargo junto a la vicepresidenta Karin Herrera en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala, la capital de la nación centroamericana, frente a correligionarios, miembros de la oposición y varias delegaciones internacionales.

La Sesión Solemne, como es llamada la ceremonia de investidura presidencial, estaba pautada para las 3:00 p.m. del domingo. No obstante, desacuerdos en el Congreso, así como una serie de decisiones judiciales hicieron que el proceso se retrasara durante horas. Lo sucedido mantuvo en vilo al país, y por un momento un sector de la población pensó que el presidente, electo el pasado agosto con más de un 60% de apoyo, podría no asumir su cargo, por lo que salieron a las calles a protestar.

Hubo por momentos encontronazos con la policía a las afueras del recinto. Mientras que en el interior los trabajos estuvieron marcados por gritos y agresiones entre los diputados.

En su primer discurso como presidente en funciones, Arévalo decidió hacer referencia a los meses posteriores a su elección, que estuvieron marcados por obstáculos judiciales, impulsados por la oposición, con la intención de que no llegara a la presidencia. "Me llena de profundo honor asumir esta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir, y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala", comenzó diciendo. "Estos últimos meses, nos hemos enfrentado a complejas tensiones y desafíos que llevaron a muchos a pensar que estamos destinados a un retroceso autoritario. Para miles de personas estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala. Sin embargo, el pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría", añadió más adelante.

El presidente también agradeció al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte Constitucional de su país por ser "instituciones fundamentales" que "protegieron el deseo soberano de los guatemaltecos". Y con firmeza comentó que "no permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad".

Ante el retraso, varias delegaciones internacionales tuvieron que abandonar la juramentación, como fue el caso del rey Felipe VI de España y el presidente chileno Gabriel Boric.

(...)

Los jueces determinaron que tendrían que juramentar como independientes, lo que debilitaba el mandato del presidente, ante el hecho de que no podían acceder a los puestos directivos ni tampoco presidir comisiones.

Más adelante, la Comisión de Credenciales, compuesta por los congresistas salientes, tardó en su labor de revisar los documentos de los diputados electos.

Esto provocó también el retraso de la juramentación de los nuevos legisladores, al igual que la Junta Directiva del Congreso, grupo que debe ocupar sus puestos antes de la investidura del presidente y vicepresidenta electa.

En medio del caos, Arévalo acudió a la red social X en la tarde del domingo para hacer un llamado a los diputados. "Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la

voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando”, sostuvo.

El nuevo Congreso logró establecerse a eso de las 7:30 p.m. (hora de Guatemala).

(...)

María Corina Machado advirtió que el régimen de Maduro “seguirá usando su sistema criminal para perseguir”

INFOBAE, 1 de enero de 2024

María Corina Machado

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, se comprometió este lunes, en su mensaje de Año Nuevo, a “hacer todo” en la “compleja negociación” que -aseguró- “se lleva adelante” con el Gobierno de cara a estos comicios, con el fin de que el “interés común” de la población “esté siempre por delante”.

“Se lleva adelante una compleja negociación con el régimen en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante”, aseguró la ex diputada en un video que publicó en redes sociales, en el que no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones.

Reiteró que en las primarias del pasado octubre, en las que arrasó con el 92,35% de los votos, el país dio “un mandato” que -afirmó- va a “cumplir”, el de la “liberación y la transformación de Venezuela a través de elecciones presidenciales libres y limpias”. Estamos “dispuestos a aprovechar la oportunidad real que tenemos”, expresó Machado.

La líder opositora aseguró que ha comenzado el año “más importante de la historia contemporánea de Venezuela”, en el que se libraré una “lucha espiritual del bien contra el mal” y se va a “enfrentar y a derrotar” a un “sistema criminal” en estos

“Lo que viene no es fácil. El régimen seguirá usando cada brazo de su sistema criminal como tentáculo para atropellar, amenazar, perseguir y atemorizar, (...) tengamos siempre presente que su propósito es desmoralizarnos y apartarnos del foco, que es construir nuestra gran organización”, dijo Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular.

Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió en diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos, de cara a las presidenciales.

Por otro lado, Machado, pidió a los ciudadanos crear sus propios comandos de campaña para estos comicios y poner “sus capacidades y recursos al servicio” de la “liberación y la transformación” del país, lo que se logrará, según dijo, a través de elecciones “libres y limpias”.

“Te pido que armes tu propio comando de campaña con Venezuela, en cada casa, en cada taller, en cada colegio, en cada iglesia, en cada bodega, en cada empresa, (...) en cada espacio en donde tú y tu gente se organiza. Vamos a tener miles y miles de comandos de campaña con Venezuela en todo el país y también en el exterior”, dijo en su mensaje de Año Nuevo.

A juicio de la ex diputada, de la organización “dependerá, fundamentalmente”, la “liberación” del país, y la celebración de “elecciones libres” es “responsabilidad de todos los venezolanos”, así como “de los demócratas del mundo, que entienden las implicaciones enormes” para la “región y para Occidente de lograr una transición pacífica y ordenada” en la nación petrolera.

Adelantó, en un video que publicó en redes sociales, que ya está en marcha la creación de la “más formidable estructura para la defensa del voto”, la “Red 600k”, una

“legión inmensa” de “600.000 ciudadanos formados y coordinados como nunca antes se ha hecho en este continente”.

“El 2024 será un año de intenso trabajo, cada uno de nosotros asumiendo su tarea”, afirmó la líder opositora, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular.

Perú: un año de sinuosa dictadura

Ctxt.es, 10 de diciembre de 2023

David Roca Basadre

El 7 de diciembre de 2022, un acosado presidente Pedro Castillo hizo un gesto que hasta ahora resulta incomprensible para muchos. Lanzó un discurso a la nación en el que disolvía el Congreso, ordenaba la detención de algunas autoridades, y convocaba elecciones sin –aparentemente– tener el menor respaldo ni civil ni militar que le permitiera hacer efectivo su propósito.

Todo parece indicar que fue vilmente engañado, incluso con encuestas falsas, adhesiones militares mentirosas, todo planificado desde hacía tiempo para llevarlo a esa situación. Cuando se dio cuenta del engaño y se dirigió a la embajada de México a buscar asilo, fue hecho prisionero irregularmente por su propia escolta y siendo todavía mandatario. El Congreso de la República votaría su destitución, sin juicio previo, una hora después de que fuera detenido.

Era un plan claramente concebido con antelación, tanta que su sucesora Dina Boluarte, con lumínico traje sastre amarillo y cuidadoso peinado, no tardó mucho en juramentar el cargo. Pero no para llamar a nuevas elecciones, como esperaba el 80% de la población, sino para quedarse hasta 2026.

Fue entonces que ardió Troya. Comenzaron las protestas masivas de las que el mundo entero fue testigo, y que a partir del día 12 de diciembre empezaron a ser reprimidas sin reparos, a balazos, al principio en Andahuaylas, provincia de la sierra sur del Perú y que, coincidentemente, es la tierra de origen de Dina Boluarte. Primer balance: siete muertos y centenares de heridos. Sucesivamente, mientras crecía el movimiento de protesta que pedía elecciones generales anticipadas, la represión armada también se incrementó. (...)

El régimen mostraba así, escudándose en un discurso que acusaba de vándalos y hasta de terroristas a todo un pueblo movilizado, y de caviares a los defensores públicos de la democracia, que no tenía reparos en recurrir a cualquier medio con tal de mantenerse en el poder. Amparado, además, por una gran prensa servil, y las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales. Así se instaló la dictadura.

(...)

Según todas las encuestas, solo el 8% de la población aprueba a Boluarte, y el Congreso de la República tiene apenas un 6% de aprobación. La situación económica cotidiana se complica, al haber entrado el país en recesión: según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se ha producido una caída persistente de la inversión privada en el país, los precios suben también por el efecto de eventos climáticos para los que el Gobierno no tiene la capacidad de desarrollar acciones preventivas, y se vienen eventos de mayor calado, como un Fenómeno del Niño particularmente grave que se dará de todas maneras y para el que no se ha hecho nada.

Las movilizaciones sociales se darán estos días de aniversario de las masacres, y el Gobierno ha aprobado una ley “antidisturbios” que castiga con hasta 15 años de cárcel a actos como interrumpir el tráfico con una marcha, pero la indignación se acrecienta. El gran problema de esa inmensa y mayoritaria oposición a la dictadura, que ya empieza a pisar nuevamente las calles, es la ausencia de un liderazgo unificador que la represente. Los varios intentos de algunos por llenar ese espacio chocan con la indiferencia de la población ante propuestas que no encajan con la demanda fundamental de democracia real, descentralizada de Lima, y participativa, que ya estaba en las movilizaciones de 2022.

(...)

Los días que vienen quizá marquen un nuevo panorama en el Perú. Los primeros actos represivos, con la detención sin razón alguna de grupos de campesinos provincianos llegados a la capital, dan una señal. Una primera marcha nacional de éxito relativo el 7/XII, marcó la partida. Todo está por jugarse aún.

Sánchez augura que la amnistía dará carpetazo al desafío independentista y aspira a convertirla en “un hito como el de Zapatero y el fin de ETA”

INFOBAE, 17 de noviembre de 2023

Pilar Araque Conde

Pedro Sánchez inaugura una nueva etapa al frente del Gobierno. Este viernes, el socialista prometió su cargo ante el rey por tercera vez desde que llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018 tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En esta ocasión lo hace en medio de un clima de máximo voltaje, tanto que la estabilidad de la presente legislatura está en el aire por la complejidad de sostener en el tiempo la mayoría absoluta que le encumbró en el Congreso el pasado jueves.

Pedro Sánchez advierte de que los partidos que se oponen a la amnistía la acabarán aceptando como con el divorcio o matrimonio LGTBI

Si bien es cierto, no es una situación del todo nueva, pues también estaba en el aire la duración de la pasada legislatura, cuando formó junto a Unidas Podemos el primer gobierno de coalición de la democracia. Sin embargo, y pese a los malos augurios, se prolongó durante tres años y medio, a diferencia de los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos (todos se rompieron antes de tiempo). A pesar de las tensiones en el seno del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos han aguantado en la misma habitación en situaciones sobrevenidas, como la pandemia o la crisis por la guerra en Ucrania, y han sacado adelante 215 leyes en el Parlamento.

“El Congreso anterior era el más fraccionado, pero este es más difícil de gestionar”, reconocen fuentes socialistas de la máxima confianza del presidente del Gobierno. Y, dentro del reto que supone esta nueva etapa, Sánchez aspira a superar otro que, por otra parte, podría convertirse en su principal legado: el fin del desafío independentista, acentuado en 2017 con la consulta ilegal del 1-O y las posteriores protestas por la sentencia del procés.

La base en la que se asienta esta previsión es la ley de amnistía, registrada el pasado lunes en el Congreso con la única firma del PSOE, pero que cuenta con una mayoría de 178 diputados. En Ferraz, bajo la dirección del secretario general, no cabe la menor duda de que esta norma será la “solución para garantizar la convivencia” en Cataluña. El propio Sánchez reconoció que la amnistía no estaba en sus planes, “al menos no por ahora”. Pero una vez se precisaban los siete votos de Junts tras el 23-J, los socialistas se abrieron a negociarla. Asumido el cambio de posición, aun con el revuelo de la calle y la oposición, el PSOE quiere hacer de la situación catalana una “política de Estado a medio plazo” para poner fin al conflicto.

Estas voces se muestran convencidas de que este paso, a pesar de los palos en las ruedas por la férrea oposición a ella, tanto política como judicial, tendrá sus frutos. “Puede haber manifestaciones y gente que siga en contra, pero si conseguimos garantizar la convivencia, en unos años [la amnistía] se reconocerá como uno de los hitos más importantes de Pedro Sánchez”.

Con todo, estas fuentes cercanas al presidente e implicadas en la negociación de la medida de gracia recalcan que, salvando las distancias, “si el fin de ETA fue el principal legado de José Luis Rodríguez Zapatero”, la solución a la crisis territorial en Cataluña agravada durante el Gobierno de Mariano Rajoy “será el principal legado de Pedro Sánchez”. Tienen claro, además, que el reconocimiento, en caso de que la jugada salga bien, recaerá solo sobre el líder del Ejecutivo ante el desmarque de la derecha.

(...)

Javier Milei echa del ejército a 23 generales por simpatizar con el Gobierno anterior

Público, 3 de enero de 2024

Raúl Kollmann

En el Ejército de Argentina, del que 23 generales fueron expulsados durante este fin de semana, tienen una frase asombrosa para interpretar la purga: "Han echado a los colaboracionistas". Esta es una referencia a generales que se llevaron bien con el Gobierno de la coalición Frente de Todos (FdT), liderada por el expresidente Alberto Fernández y que ha sido rebautizada como Unión por la Patria.

Ese vínculo se estableció, sobre todo, durante la pandemia del covid-19, cuando el Ejército argentino intervino en la provisión de vacunas, alimentos e incluso montó algunas cocinas de campaña. Debe recordarse que horas antes de las elecciones en las que el ultraderechista Javier Milei ha salido electo este 2023, su hermana (Karina Milei) pidió que la Armada y la Fuerza Aérea controlasen las urnas, lo que hizo crecer la desconfianza hacia el Ejército en el país.

Se ve que Karina Milei no sabía que ya participaban en el operativo de custodia de urnas, pero amagó con echarle la culpa a los militares del fraude del que la población argentina comenzó a quejarse al conocer los resultados de la votación.

El cambio en el Ejército respeta, además, una segunda prioridad de los ultraderechistas: la relación con EEUU. Finalmente, en las Fuerzas Armadas queda la sensación de que se buscó imponer a jefes jóvenes, sin mucha doctrina, más dóciles ante un eventual terremoto como podría ser el cierre del Congreso o la venta y privatización de bienes públicos.

Un ejemplo del que se habla mucho en el ambiente de los que apoyan a Milei es la conversión de la base naval de Mar del Plata en un puerto orientado a la actividad petrolera.

El recambio de más envergadura es el que se produjo en el Ejército. Las renovaciones han sido casi totales tras la designación del nuevo general, Alberto Presti. Esto ha significado el retiro de los generales de mayor antigüedad, 23 en total.

Los despedidos sostienen que la purga se debe a su relación normal con el gobierno de Alberto Fernández y con el exministro de Defensa, Jorge Taiana. Afirman que se renueva la plantilla con generales más jóvenes y que apoyan a Juntos por el Cambio de forma pública.

Además, la condición indispensable que los jefes del Ejército deben cumplir es la hermandad con EEUU, algo que es ya casi una norma entre las milicias argentinas.

A todo esto, se suma la cercanía con el macrismo. Presti viene de la IV Brigada de Córdoba, donde soldados bajo su mando cocinaron en un acto partidario organizado por el entonces opositor Luis Juez. Presti tiene además un hermano, Daniel, que milita en Juntos por el Cambio desde hace años y su padre, Roque, fue acusado por delitos de lesa humanidad.

Todo apuntaba a que la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas iba a recaer en un hombre del Ejército. El cargo es rotativo, pero es un secreto a voces que la Armada sufre todavía los tremendos efectos del hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017, y eso ha impedido el surgimiento de nuevos líderes no manchados por aquel desastre.

Por lo tanto, el nuevo jefe será el general Xavier Julián Isaac, de la Fuerza Aérea.

(...)

Una amnistía para Puigdemont.

HERALDO DE ARAGÓN, 10 de marzo de 2024.

Mikel Iturbe.

Pese al bosque y su hojarasca, conviene insistir en que en España nadie que se confiese o defienda políticamente una opción independentista ingresa en prisión. Los condenados por el Tribunal Supremo en el caso del 'proceso' lo fueron por violentar la Constitución, por la comisión de diferentes delitos como la sedición o la malversación. En Cataluña existe un Gobierno autonómico que se define abiertamente independentista y que, pese a perseguir su anhelo secesionista, se encuentra amparado por el ordenamiento constitucional. También es bueno recordar que, en las elecciones de diciembre de 2017, convocadas por el entonces presidente Mariano Rajoy tras activar el artículo 155, concurren los partidos que en septiembre de aquel mismo año habían aprobado las conocidas como 'leyes de desconexión', donde, por cierto, se incluía la amnistía para el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

Las primeras reacciones del independentismo catalán a la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del texto de la ley de amnistía han insistido en la alteración del relato objetivo de los hechos. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló que lo acordado era «el inicio del fin» de una «pesadilla en forma de represión», mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aseguraba que este acuerdo evitará que los jueces «retuerzan» la ley.

Para muchos puede parecer trivial la defensa de la precisión del relato dentro de la maraña declarativa en la que se ha convertido la política, pero el cómo y el quién son siempre significativos. Que el secesionismo altere a capricho una narración, sin dejar de ser algo tan injusto como interesado, resulta previsible, pero que el Gobierno secunde esta práctica o que, sencillamente, opte por no censurarla, nos introduce en la desolación. Habla el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de la apertura de una «etapa de diálogo» y del cierre de un «conflicto» sin reparar en que el empleo de ciertos términos no hace sino menoscabar el peso y la acción de la Justicia.

Al margen de un procedimiento de tramitación de la ley que ha evitado todo debate y de las severas dudas de constitucionalidad, la supuesta bondad del argumentario del Gobierno sobre el alumbramiento de un nuevo tiempo de reconciliación se cae por su propio peso cuando se escucha al independentismo. Tanto para ERC como para Junts, la amnistía no es más que «el punto de partida» de un proceso que tras un referéndum de autodeterminación habrá de culminar con la independencia. No existe ni arrepentimiento ni petición de disculpas por el desafío secesionista y, desde luego, tampoco aparece por ninguna parte una voluntad de reparación que busque la construcción de un nuevo clima de lealtad. La amnistía es la pieza que demandaba el independentismo para prestar su apoyo parlamentario al Ejecutivo de Sánchez -estos días fuera de España por encontrarse de viaje oficial en Brasil y Chile-, y la que, sin mayores reparos, le ha sido concedida.

La amnistía es una ley hecha a medida para Carles Puigdemont que quiebra el principio de igualdad defendido en la Constitución y que en su contenido establece un escandaloso blindaje que en materia de terrorismo no tiene reparo alguno en sortear el Código Penal español para remitir a las normas europeas. Se protege, de este modo, al expresidente catalán del Tribunal Supremo mientras se restringe la acción que pueden desplegar los jueces españoles.

Queda ahora por conocer qué ocurrirá en los próximos meses. Con una tramitación que se presupone agitada, especialmente en el Senado donde el Partido Popular tiene

mayoría y buscará apurar los plazos, pocos dudan de que la ley acabará ante el Tribunal Constitucional. Si se supera este último obstáculo, será el momento de descubrir cuál es la interpretación y aplicación que realizan los jueces.

Qué esperar en Venezuela tras la convocatoria para las elecciones presidenciales el 28 de julio.

INFOBAE, 6 de marzo de 2024.

Geneviève Glatskt.

La decisión de realizar las presidenciales es un cumplimiento parcial de un compromiso con EEUU, pero con la exclusión de la principal figura de la oposición muchos se preguntan si la votación será libre y justa

Las autoridades venezolanas anunciaron este martes que las elecciones nacionales que muchos esperaban que forjaran un camino hacia la democracia se celebrarán el 28 de julio.

Pero la decisión sobre la fecha se produce un mes después de que el más alto tribunal del país excluyera de la votación a la principal candidata de la oposición, lo que hizo que muchos se preguntaran hasta qué punto serán unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, el anuncio del gobierno del presidente Nicolás Maduro implica al menos un cumplimiento parcial del compromiso adquirido con Estados Unidos de celebrar comicios este año a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

En octubre, Maduro firmó un acuerdo con la oposición del país y se comprometió a trabajar por unas elecciones presidenciales libres y justas. En el acuerdo, Maduro dijo que celebraría elecciones antes de finales de año, y Estados Unidos, a su vez, levantó algunas sanciones como muestra de buena voluntad.

Pero pocos días después, Maduro vio cómo una candidata de la oposición, María Corina Machado, ganaba más del 90 por ciento de los votos en las elecciones primarias organizadas por la oposición, que no tuvieron la participación del gobierno. Los decisivos resultados acentuaron su popularidad y plantearon la posibilidad de que pudiera derrotarlo en unas elecciones generales.

Desde entonces, el gobierno de Maduro inhabilitó a Machado para postularse, por lo que considera como irregularidades financieras ocurridas cuando era diputada nacional, y ha detenido a varios miembros de su campaña. En los eventos de Machado, se han presentado hombres en motocicleta que han atacado a sus simpatizantes.

La flexibilización temporal de las sanciones estadounidenses al sector del petróleo y el gas expira el 18 de abril, y el gobierno de Joe Biden podría optar por volver a imponerlas.

El anuncio del martes “deja meridianamente claro que Venezuela no celebrará elecciones libres y justas este año” y “prácticamente garantiza que el gobierno de Biden volverá a imponer sanciones”, declaró Geoff Ramsey, experto en Venezuela del Atlantic Council, institución de investigación con sede en Washington.

El chavismo, el movimiento de inspiración socialista que lidera Maduro, ha controlado Venezuela durante 25 años. En 2013, Maduro llegó al poder tras la muerte de su predecesor, el presidente Hugo Chávez, y se mantuvo en el poder tras unas elecciones celebradas en 2018 cuyos resultados se consideraron ampliamente fraudulentos.

A esas elecciones siguió un periodo de aislamiento internacional, en el que muchos países siguieron el ejemplo de Estados Unidos y se negaron a hacer negocios con Venezuela. La fecha de las próximas elecciones, el 28 de julio, es el cumpleaños de Chávez. El anuncio se produjo en la fecha de su muerte, el 5 de marzo.

Phil Gunson, analista de International Crisis Group quien está radicado en Caracas, la capital del país, dijo que es probable que esa decisión busque aprovechar el legado

de Chávez para reforzar la capacidad de elección de Maduro, quien es profundamente impopular.

Los candidatos de la oposición tienen hasta el 25 de marzo para inscribirse. No está claro si el partido de Machado intentará insistir en su candidatura o si buscará apoyar a otro candidato.

Es probable que una oposición fragmentada pueda ser una ventaja para la candidatura de Maduro.

"La combinación de una oposición dividida, una fuerte abstención y unos oponentes débiles le da la mejor oportunidad de ganar sin tener que cometer fraude", dijo Gunson.

Provocación.

El PAÍS, 11 de marzo de 2024.

Arnoldo Kraus.

El 7 de marzo, Andrés Manuel López Obrador calificó la acción de los normalistas de la Normal Superior de Ayotzinapa y la de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi una década en Iguala, como “una vulgar provocación”. Jóvenes estudiantes y padres huérfanos derribaron, en señal de protesta y desesperación, una puerta del Palacio Nacional—en español no existe la palabra que califique el estatus de los padres que perdieron a sus hijos—. López Obrador denunció, como siempre lo hace —¿le faltan palabras o le sobran certezas? — que detrás del derrumbe de la puerta había “una mano negra”: infiero que se refiere a extorsionadores y no a bandas criminales.

De las “manos negras” contra su régimen sabemos, vía sus ideas y las de sus camaradas, quiénes son los miembros de esos grupos. López Obrador aseguró que los instigadores —¡Eureka! — son los de siempre: organismos internacionales supuestamente defensores de derechos humanos, grupos de derecha, opositores, conservadores e incluso partidos que están en contra de la transformación; en esta ocasión, durante la matiné del 7 de marzo, ¡recórcholis!, no denunció a los neoconservadores ni a los periodistas pagados por los grupos de poder mexicanos o extranjeros que lo critican debido a los estímulos que reciben.

Tras el suceso, López Obrador, ¿quién es el provocador?, ofreció dialogar con los padres, pero, advirtió que el encuentro será sólo con los progenitores, pues...” no me dan confianza los intermediarios”. Lo de la desconfianza es inentendible. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. El episodio, uno de los más cruentos en la historia del país, representa un suceso abominable y terrible: durante el acto se violaron, ad nauseam, derechos humanos. Sin respuesta, sin que se cumplan los ofrecimientos del gobierno actual de esclarecer la situación, ¿es lícito hablar, como lo hace el presidente, de provocación? Siempre es ético y necesario colocarse en el lugar de los otros. En el affaire Ayotzinapa los otros son los padres huérfanos y los nuevos normalistas. La provocación debe leerse en sentido inverso: tras una década sin respuestas, sin reuniones ad hoc, sin explicar quiénes son los verdaderos culpables, la provocación proviene del gobierno por su negligencia y omisión para resolver el caso.

Nuestro presidente incluso ha cuestionado la procedencia de los manifestantes que irrumpieron en la residencia presidencial. Ha sugerido que son grupos contratados, y advirtió: “Si es que están participando los jóvenes de Ayotzinapa, todavía está por verse si son de ahí. En una de esas son gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros. Pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa les diría que eso no es revolucionario, es actuar como contras a favor de los conservadores. Que no se dejen manipular, si es que son estudiantes, ya lo vamos a saber”. A López Obrador también le sorprendió que algunos jóvenes calzaran tenis nuevos. Bueno, bueno, bueno... Los decires del presidente, avalados por su séquito, inquietan: ¿por qué sospecha que fueron acarreados?, ¿qué tanto sabe de zapatos tenis?, ¿quién supone los recluta?, ¿de verdad considera que son mercenarios?, cuando habla de contras, ¿piensa en el siniestro Daniel Ortega, uno de sus compinches predilectos? Los padres y normalistas de Ayotzinapa no provocan. Exigen, tras una década, respuestas. Quienes provocan son AMLO y sus ministros inopinados.

Nicaragüenses en el exilio piden juzgar la "estructura represiva" del Gobierno de Ortega.

CE Noticias Financieras, 7 de marzo de 2024.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, identificó una estructura represiva en el Gobierno que preside Daniel Ortega, que opera principalmente desde 2018, y la cual debe ser llevada ante la justicia internacional, destacó este miércoles la sociedad civil nicaragüense en el exilio.

Para las organizaciones nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, el segundo informe del GHREN, presentado la semana anterior ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, resalta "la estructura represiva y cadena de mando de la dictadura de Nicaragua encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos que incluyen delitos de lesa humanidad".

Según el informe, la estructura de represión está encabezada por el presidente Ortega, quien se encuentra en el poder desde el 2007, y su esposa, la vicepresidenta Murillo.

¿En quiénes delegan Ortega y Murillo? Ortega y Murillo delegan en el asesor de seguridad e inteligencia de la Presidencia nicaragüense, Néstor Moncada Lau; en el ministro asesor del presidente de la República para Asuntos de Seguridad, el comisionado general en retiro de la Policía Nacional Horacio Rocha, y en el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, las acciones "para reprimir cualquier tipo de posición a su régimen, tanto a quienes están dentro o fuera del país". El informe señala también a la fiscal general de la República, a la exguerrillera sandinista y exsubdirectora de la Policía Nacional Ana Julia Guido, y a la ministra y al viceministro del Interior, María Amelia Coronel y Luis Cañas Novoa, respectivamente.

Además, al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) Gustavo Porras; a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y al director de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, entre otros, de ser los principales operadores de la represión contra los nicaragüenses.

"Este segundo informe que amplía el presentado en marzo de 2023, determina que Ortega y Murillo, y funcionarios de siete instituciones del Estado, incluyendo a la Policía, han cometido actos de crímenes de lesa humanidad", según una declaración de la sociedad civil nicaragüense en el exilio

Según el grupo de expertos, el objetivo de Ortega es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía y para eso persigue a opositores o personas percibidas como tales, y perpetra violaciones, abusos y crímenes.

Los expertos constataron, según el informe, una "perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país, con una centralización total de los poderes del Estado en manos del presidente y de la vicepresidenta, particularmente en lo que se refiere al poder judicial", alertaron los organismos, entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Para los organismos, el control absoluto de todos los poderes del Estado por parte de Ortega, "se ha traducido en una total impunidad, que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio de Nicaragua".

La crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 en Nicaragua dejó al menos 355 personas fallecidas luego que grupos de choque, paraestatales y policías, muchos de ellos con armas de uso exclusivo del Ejército, dispararon contra civiles que

participaron en marchas y protestas por todo el país, según las organizaciones en el exilio, que reportan, además, 4.000 personas heridas de bala. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El modelo Bukele se extiende por América Latina.

LA VOZ DE GALICIA, 11 de febrero de 2024.

Héctor Estepa.

Nayib Bukele es el político más popular de América Latina. Más del 80 % de los encuestados en El Salvador han apoyado su gestión en sucesivos sondeos. Pero el polémico presidente, autodefinido como el «dictador más *cool* [guay] del mundo», no solo es apreciado dentro de su país. Su popularidad trasciende fronteras y numerosos políticos de América Latina ya copian su discurso y algunos, incluso, sus políticas.

Es esperable que esa tendencia crezca después de las elecciones de El Salvador, en las que Bukele se declaró ganador con más del 85 % de los votos, a pesar de que ha habido problemas con el recuento oficial. Ese éxito en las urnas hace todavía más apetecible imitar su estilo para los políticos que quieren aspirar a cargos de importancia en la región.

Todos tienen claro la razón de la popularidad de Bukele: El Salvador ha pasado de tener 38 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2019 a apenas 2,3 el pasado año, después de que Bukele decretase un estado de excepción criticado, al mismo tiempo, por numerosas organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones sumarias, torturas y la muerte de más de 150 personas en manos de las autoridades.

Incluso la prensa independiente declara como desarticuladas a las pandillas que antes sembraban el caos. «Nos interesa adoptar el modelo de Bukele», dijo recientemente Patricia Bullrich, la nueva ministra de Seguridad de Javier Milei, que ha elaborado un controvertido «plan antipiquetes» para controlar las protestas. Varios políticos de Colombia propusieron en las recientes elecciones locales crear megacárceles como la de Bukele. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro declaró su propio estado de excepción.

Pero quizás el caso más paradigmático es el de Ecuador, que sufre la mayor crisis violenta de su historia. El nuevo presidente, Daniel Noboa, de 36 años, no defendió políticas de especial mano dura durante la campaña. Tampoco su rival, la correísta Luisa González, lo hizo. Los ecuatorianos, por ende, no apoyaron esas medidas en las elecciones.

Todo cambió en enero. Una jornada de extrema violencia, con el asalto armado a una estación de televisión, hizo explotar los pedidos de medidas bukelistas. Noboa tomó el testigo, decretó un estado de excepción, sacó a los militares a la calle, detuvo a 2.000 personas en un día y anunció la construcción de dos megaprisiones.

A la espera de comprobar la efectividad de las medidas, lo que definitivamente ha copiado el joven presidente es el estilo espectacular de las detenciones grupales e incluso la estética desenfadada de Bukele. Parte de los analistas no creen, eso sí, que las políticas salvadoreñas sean exportables, tampoco a Ecuador.

Primero, porque se necesita un poder elevado que la mayoría de los presidentes latinoamericanos no tienen. Bukele controla la práctica totalidad del legislativo, pero Noboa, por ejemplo, gobierna en una muy débil coalición con la izquierda correísta y la derecha tradicional.

Segundo, y no menos importante, por la naturaleza distinta de los criminales de uno y otro país. Las pandillas violentas de El Salvador estaban lejos de tener un papel relevante en el tráfico internacional de drogas. Su forma de financiación era la extorsión.

En México —que ya emprendió una aventura similar y fallida a principios de siglo—, Colombia, Ecuador y Brasil operan bandas internacionales del narcotráfico

financiadas por un caudal multimillonario de dólares y con acceso a armamento sofisticado. En esos países se han desarticulado carteles, como los de Medellín o Cali, pero el crimen mutó y la violencia persiste porque la cocaína sigue siendo un espectacular combustible de ingresos.

Ayuso, la fruta y el negacionismo.

PÚBLICO, 10 de enero de 2024.

Pepe Viyuela.

Cuando escuchamos hablar a un negacionista a algunos se nos queda la boca abierta, quizá porque nos cuesta creer que se pueda tener tanta cara, estar tan engañado o, sencillamente, que él o ella puedan pensar que somos tan tontos como para tragarnos las bolas de pellet playero con las que pretenden hacernos comulgar.

El negacionista profesional puede llegar a extremos tales como negar que ha dicho lo que ha dicho y sustituir eso que ha dicho por otra frase que quizá recuerda a lo que se dijo, pero que no tiene nada que ver con lo que en realidad se dijo.

Esto, que puede parecer un trabalenguas, constituye la ceremonia de la confusión a la que asistimos a diario en el paisaje político planetario. En el gran supermercado de mentiras que es el mundo, por ejemplo, se puede llegar a plantear como necesidad de defenderse lo que es un genocidio con todas las letras o definir como un ejercicio de libertad presentarse a unas elecciones presidenciales siendo un delincuente.

Pero no es necesario abordar temas tan tremebundos para encontrar ejemplos de cinismo de libro en nuestro entorno. La amada líder Isabel Díaz Ayuso, no solo niega, por ejemplo, el cambio climático y se queda tan ancha, sino que acusa de comunistas a quienes lo denuncian.

Para ella, por lo visto, el calentamiento global tiene filiación política y constituye una ideología y no un hecho demostrado científicamente. Siguiendo sus argumentos uno llega a pensar que los científicos que hablan del cambio climático son Guardias Rojos amenazando el palacio de invierno del capitalismo ultraliberal que ella defiende con uñas y dientes.

La señora Ayuso se está convirtiendo en un fenómeno sociológico que será estudiado en el futuro como un ejemplo de cómo la simplicidad y la caradura pueden convencer más que la inteligencia y la honestidad.

Va tan lejos en sus flipantes viajes negacionistas que es capaz de decir que dijo que le gusta la fruta, cuando la frase que todos sabemos que espetó -ella la primera-, fue otra muy distinta. (...)

Se argumentará que eso de la fruta está dicho desde el humor, que es una broma y que constituye solamente un chiste. Bien, admitamos que Ayuso tiene sentido del humor; pero admitamos también que la broma le ha servido de arma arrojadiza y, sobre todo, para evitar pedir disculpas. Su broma ha sido usada no como un elemento de distensión, sino para aumentar la tensión de la cuerda política de la que es, hay que reconocerlo, una maravillosa funambulista.

Con su exhibición humorística, Ayuso queda de nuevo investida como la graciosa oficial ante la inmensa cohorte de aduladores con la que cuenta, y que aplauden cualquier ocurrencia suya convirtiendo hasta sus estornudos en un motivo de fiesta y de celebración, ya sea en forma de camisetas, consignas en manifestaciones patrióticas o regalos de fruteros navideños.

Quien ya utilizó el "que te vote Chapote" como lema electoral o ha elevado a categoría de discurso político la consigna "libertad o comunismo", quien tiene una pizza con su nombre ("Madonna Ayuso"), (...) se ha convertido en la monolguista favorita de la derecha, con los fans más furibundos y que se pirran por consumir su *merchandising*. ¿Alguien da más?

Ojo, no seré yo quien niegue las bondades y la necesidad del humor. Pero sí me gustaría decir que el humor no necesariamente es bueno de por sí y que en ocasiones puede resultar hasta nocivo. Hay un humor macarra y de barra de bar que suele

terminar en bronca. Lo peor de ese tipo de humor no es quien lo ejerce, sino más bien, como queda dicho, quien lo jalea.

Siempre se ha hablado de buenos y malos humores. (...)

No sé qué tipo de humor es del que abusa la presidenta, pero sería deseable algo más de flema en sus manifestaciones y un poco menos de bilis sea del color que sea, así como un cierto enfriamiento de la sangre de quien la jalea y le aplaude las gracias.

